



Señor

**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE** (Reparto)

E.                      S.                      D.

DEMANDANTE:    MICAELINA JARAMILLO LOZANO  
C. C. 31.187.465 de Tuluá (V)

DEMANDADO:    LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –  
COLPENSIONES –

**GUSTAVO ADOLFO MORENO ARISTIZÁBAL** mayor y vecino de Tuluá Valle, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.498.897 de Tuluá Valle, abogado acreditado con la Tarjeta Profesional número 191.327 del C.S.J., obrando de conformidad con el poder especial que para el efecto me fue conferido por la señora **MICAELINA JARAMILLO LOZANO** mayor y vecina de Tuluá Valle, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.187.465 expedida en Tuluá, respetuosamente me dirijo al señor **JUEZ DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE BUGA VALLE** en ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para presentar la demanda con la que ha de darse inicio a un proceso ordinario en contra de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** – Empresa Industrial y Comercial del Estado providencia en la que se resuelva hacer las declaraciones y condenas que en el respectivo acápite se indican.

**1.    DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES.**

1.1    **DEMANDANTE.** La señora MICAELINA JARAMILLO LOZANO mayor y vecina de Tuluá Valle, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.187.465 expedida en Tuluá, representado por el suscrito togado GUSTAVO ADOLFO MORENO ARISTIZÁBAL, mayor y vecino de Tuluá Valle, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.498.897 de Tuluá y acreditado con la Tarjeta Profesional número 191.327 del C.S.J.

1.2    **DEMANDADO.** LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – Empresa Industrial y Comercial del Estado representado legalmente por el por el Gerente General Doctor MAURICIO OLIVERA o por quien haga sus veces.



## 2. PRETENSIONES.

- 2.1 **Declarar** que es nulo el artículo primero de la resolución No. 322930 de 2014, expedida por la Gerente Nacional de reconocimiento Colpensiones Empresa Industrial y Comercial del Estado, en cuanto que por ella reconoce y reliquida la pensión de vejez de mi mandante Micaelina Jaramillo Lozano de \$1.037.764 efectiva a partir del 1° de diciembre de 2013.
- 2.2 **Declarar** que es nulo el artículo primero de la resolución No. 106533 de 2015, expedida por la Gerente Nacional de reconocimiento Colpensiones Empresa Industrial y Comercial del Estado, en cuanto que por ella confirma en todas y cada una de sus partes la resolución GNR 322930 del 16 de septiembre de 2014.
- 2.3 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho **condenase** a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – resuelva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 en su integralidad y en consecuencia, liquide, reconozca, y pague su pensión de vejez teniendo en cuenta que su mesada pensional que deberá ser igual al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios incluidos todos los factores salariales.
- 2.4 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho **condenase** a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – a pagar a la señora Micaelina Jaramillo Lozano la liquidación de su pensión desde el momento en que adquirió la pensión.
- 2.5 **Declarar** que mi poderdante tiene derecho a TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO a que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – le **LIQUIDE** su pensión de vejez y en consecuencia deberá proceder a liquidar los reajustes pensionales decretados a favor de mí mandante, teniendo en cuenta la nueva cuantía o de acuerdo con la siguiente formula:

$$R = \frac{\text{RII } \underline{\text{índice final}}}{\text{Índice inicial}}$$



- 2.6 **Condenar** a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – a que sobre las diferencias adeudadas a mi mandante le pague las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor de estas, conforme al índice de precios al consumidor al por mayor y tal como lo autoriza el Art. 187 del C.P.A.C.A.
- 2.7 **Condenase** a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – a pagar a la señora Micaelina Jaramillo Lozano la suma que corresponda por concepto de costas y agencias en derecho que se causaron en este proceso.
- 2.8 Se dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Las anteriores pretensiones tienen como fundamento la relación de los siguientes:

### 3. FUNDAMENTO DE HECHO DE LAS PRETENSIONES.

- 3.1 La señora Micaelina Jaramillo Lozano nació el 12 de octubre de 1952, que laboró en el sector público de manera ininterrumpida por más de 25 años, Tiempos de servicios que fueron aportados con la solicitud de reconocimiento de su pensión de vejez.
- 3.2 La señora Micaelina Jaramillo Lozano el 18 de febrero de 2008, solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez ante el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) hoy en liquidación y mediante Resolución No. 16272 de 2009, se le concede una pensión de vejez, conforme al artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto Reglamentario 758 del mismo año por un valor de \$ 677.111 dejando en suspenso el pago de la mesada pensional hasta tanto se acredite el retiro definitivo del servicio público.
- 3.3 A la señora Micaelina Jaramillo Lozano la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – mediante resolución GNR 250418 del 7 de octubre de 2013, se le reconoció la pensión por vejez a la afiliada en una cuantía de \$ 991.953,00 a partir del 1° de octubre de 2013.
- 3.4 La señora La señora Micaelina Jaramillo Lozano presento el 15 de octubre 2014, recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No. 322930 del 16 de septiembre de 2014, en el que solicita modificar la



resolución y que se liquide y ordene su pago, en aplicación íntegra de la Ley 33 de 1985, tomando como base del monto el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes del último año de servicios, en aplicación del principio de favorabilidad de la condición más beneficiosa.

- 3.5 Que mediante resolución GNR 322930 DE 16 de septiembre de 2014 la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – resolvió reliquidar la pensión de vejez a favor de la señora Micaelina Jaramillo Lozano a partir de 1 de diciembre de 2013.
- 3.6 Que mediante Resolución GNR 106533 del 14 de abril de 2015 la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – en su parte resolutive resolvió confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución GNR 322930 del 16 de septiembre de 2014.
- 3.7 Que mediante resolución GNR 322930 DE 16 de septiembre de 2014 la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – le reconoce la reliquidación de la pensión de vejez a mi mandante sin tener en cuenta todos los factores salariales, desconociendo factores como Sub. Alimentación, Auxilio Transporte, Prima de Servicios, Prima de Vacaciones y Navidad, Bon. Recreación, recargos Nocturnos y Dominicales, violando de esta manera las normas aplicables para el caso como es la liquidación de la pensión de vejez además en la parte resolutive resolvió en su artículo 1º reliquidar la pensión de vejez a mi procurada ordenar el pago en una pensión mensual vitalicia de jubilación desde el 1º de diciembre de 2013 por un valor de \$ 1.037.764.
- 3.8 Que mediante decreto No. 280-018.0831 del 13 de noviembre de 2013, el señor alcalde municipal de Tuluá, el secretario de Desarrollo Institucional y el Jefe Oficina Asesora Jurídica, aceptan la renuncia irrevocable al cargo de auxiliar Administrativo Código 407 grado 01, en la secretaria de Hacienda.
- 3.9 La señora Micaelina Jaramillo Lozano es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, además cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, norma que le es más favorable y debe ser aplicada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – al momento de reliquidar su pensión como base del monto del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes del último año de servicios.



3.10 A la señora Micaelina Jaramillo Lozano la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – le debió tomar la asignación mensual más elevada que hubiere devengado el último año de servicio incluidos todos los factores salariales, certificado por el pagador, por consiguiente la reliquidación de la pensión de jubilación de mi procurado, se debe hacer sobre lo devengado en el último año de servicio que constituye desde el 01 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2013.

3.11 Para el año 2013 fecha para la cual se le reconoció la pensión de jubilación tiene derecho a una pretensión equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiese devengado en el último año de servicio e incluidos todos los factores salariales.

Asignación Básica.....	\$ 935.2962.00
Aux. De Alimentación.....	\$ 4.617
Vacaciones.....	\$ 76.278
Prima de vacaciones.....	\$ 54.484
Bon. Po Recreación.....	\$ 6.704
Prima legal.....	\$ 51.959
Prima de Navidad.....	\$ 109.560
<b>TOTAL: .....</b>	<b>\$ 1.238.898.00</b>

**PROMEDIO** \$ 1.238.898.00 X 75% = \$ 1.037.764.00 efectiva a partir del 1º diciembre de 2014.

3.12 Los reconocimientos de los anteriores factores salariales, han sido a través de normas nacionales que son de obligatorio cumplimiento y el Asesor de la Gerencia de LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – no tuvo en cuenta todos los factores salariales que constituyen salario en la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación.

3.10 En este orden de ideas, LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – debe reliquidar la pensión de la señora Micaelina Jaramillo Lozano sobre la asignación mensual más elevada que hubiese devengado el último año de servicio, incluidos todos los factores salariales como son los siguientes, Asignación básica, Sub. Alimentación, Aux. Transporte, Prima de Servicios, Prima de Vacaciones y Navidad, Bon. Recreación, recargos Nocturnos y Dominicales.



#### 4. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEMANDA.

##### **Normas violadas y concepto de la violación.**

Constitución Nacional: Art 4, 13 y 58, LEY 100 DE 1993 – Artículos 17 y 36 ley 33 de 1985, Ley 62 de 1985, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21; Decreto 1045 de 1978 Decreto 1158 de 1194 y demás normas complementarias.

Dentro de aquellos servidores que disfrutaban de un régimen especial de pensiones, se encuentran los funcionarios y empleados oficiales de los Hospitales E.S.E. Las prestaciones sociales de estos servidores se regulan por la Ley 33 de 1985 Art. 1 Ley 62 de 1985 decreto 1045 de 1978 y el decreto 1158 de 1194 y demás normas concordantes.

Las anteriores disposiciones se refieren en su orden a las siguientes materias:

Mi petición principal se basa en que no es correcto, fraccionar las normas en contra del principio de la indiscibilidad, así no resulta correcto que se de aplicación a la Ley 33 de 1985, para reconocer mi condición de pensionado especial y se liquide con las normas que corresponden a los regímenes ordinarios, en tal sentido reclamo la aplicación en igualdad de condiciones de las normas que se aplicaron para liquidar a todos los beneficiarios de este régimen especial antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de igual manera todas las decisiones jurisdiccionales que vienen orientando el tema a través de acciones de tutela o de nulidad y restablecimiento del derecho:

**LEYES 33 1985.** “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

Siendo esta la norma aplicable bajo la vigencia de la Ley 33 de 1985, resulta totalmente legal que se continué aplicando para calcular la liquidación con base en lo devengado en el último año de servicio y no en el tiempo que me faltare para cumplir el requisito.





**LEY 62 DE 1985:** Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Los aportes de mi poderdante es un caso especial ya que se encuentran claramente referidos por referencia directa, no siendo obligación atribuible al trabajador, sino al empleador la de adelantar las cotizaciones correspondientes. Bajo el principio de la confianza legítima considero que la administración del HOSPITAL SANTACRUZ da plena aplicación a las normas que rigen la entidad.

**PENSION DE JUBILACION.** El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985. El tiempo de servicios prestados en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos.

Esta norma mantiene el régimen pensional previsto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, sin que tampoco defina los factores de salario con los que se liquidara la pensión allí consagrada.

En los aspectos no previstos en este decreto o en los reglamentarios, a los empleados del Instituto se les aplicaran las normas vigentes para los servidores públicos nacionales.



Decreto 446 de 1.994: 1.-Asignación Básica (Art. 1 Dto. 446/94), 2.- Sobresueldo (Art. 17 Dto. 446/94). 3.-Subsidio de Alimentación (Art. 14 Dto. 446/94) 4.-Auxilio de Transporte (Art. 13 Dto. 446/94) 5.-Subsidio Familiar 7% (Art. 15 Dto. 446/94) 6-Bonificación Por Servicios (Art. 18 Dto. 446/94) 7.-Prima de Servicios (Semestral) (Art. 4 Dto. 446/94) 8.-Prima de Vacaciones (Art. 3 Dto. 446/94) 9.-Bonif. Especial Por Recreación (Art. 3 Par. 1 Dto. 446/94) 10.-Prima De Navidad (Art. 2 Dto. 446/94) 11.-Sueldo Por Vacaciones (Art. 3 Dto. 446/94,) 12.-

Siendo esta la norma específica la aplicable para mi régimen especial, no se puede desconocer bajo interpretaciones desfavorables e ilegales.

SI LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - HUBIERA LIQUIDADO LA PENSION DE JUBILACIÓN DE LA SEÑORA **MICAELINA JARAMILLO LOZANO**, A QUE TIENE DERECHO LEGAL, DEBIO LIQUIDAR LA PENSIÓN POR LA SUMA DE \$ **1.258.965.00** Y NO COMO SE INDICO EN LA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO QUE LIQUIDO DICHA PENSIÓN POR LA SUMA DE \$ **1.037.764.00**.

La señora Micaelina Jaramillo Lozano se notificó de la resolución No. GNR 322930 del 16 septiembre de 2014, sin embargo los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por los interesados por lo que se encuentran dentro del término legal para incoar la acción.

Ha sido costumbre del EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACIÓN - desconocer los derechos adquiridos y violar las normas legales, no tener criterios fijos y definidos pues a unos maestros y solicitantes sí reconocen las pensiones con base a los factores salariales relacionados y a otros no. Por ejemplo a ERWIN DARIO REALPE ORDUZ, le reconocieron su pensión con todos los factores salariales, y en cambio a mi poderdante no le reconocieron todos los factores salariales que debidamente están certificados por el pagador, teniendo el mismo derecho que estos y por el principio de igualdad consagrado en el art 13 de la Constitución, el ISS debió reconocer los demás factores salariales devengados violando tajantemente dichas normas.

Como quiera que mi mandante prestó sus servicios en la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TULUÁ (V), más concretamente en esa





municipalidad por lo que es conocedor y competente ese despacho por el factor territorial para conocer de la Litis.

## 5. CONCEPTO DE VIOLACIÓN

### EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL LO PROTEGE LA CONSTITUCION

**La seguridad social en pensiones es un derecho constitucional. Artículo 48 y 49 de la Constitución Política.**

La carta de 1991 constitucionalizo la seguridad social en los artículos 48 y 49. En la asamblea Constituyente fueron numerosos los debates que se dieron para lograrlo. La Corte Constitucional en Sentencia T-323 de 1996|, explico la razón de ser de esta protección.

*“... evidentes razones de justicia material... llevaron al constituyente a vincular al Estado con la garantía de la dignidad de quienes al término de su vida laboral luego de contribuir con su trabajo a la construcción de la riqueza nacional merecen de la sociedad no solo un justo reconocimiento sino una pensión equivalente a un porcentaje de su salario para asegurar una vejez tranquila. Frente a este derecho el estado debe actuar con toda energía y prontitud de manera tal que quienes han adquirido en virtud de su edad y años de trabajo una pensión de jubilación o vejez, no se vean ni siquiera transitoriamente desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio estado o de los particulares que por ley estén obligados a asumir la prestación social...”*

**Quienes adquieren el status de jubilado también tiene un derecho adquirido Artículo 58 Constitución Política.**

La persona que cumple con los requisitos exigidos para acceder a una pensión ipso facto tiene el status de jubilado y por consiguiente un derecho adquirido al reconocimiento pleno y oportuno de su jubilación. No es un derecho abstracto sino un derecho que se concreta en una mesada pensional.

El artículo 11 de la ley 100 de 1993 ordena respetar y mantener la vigencia de los derechos adquiridos conforme a la normatividad anterior determinación que se corrobora en las sentencias C-027/95 y C-168/95.



En números fallos entre ellos la Su-430/98, se dice que hay un derecho adquirido a la pensión de vejez. Estas jurisprudencias tienen su precedente en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta ejercía el control Constitucional.

**La seguridad social en pensiones, al constituirse en derecho adquirido, debe ser respetada (con aplicación del principio de favorabilidad) y es exigible ante los jueces. Artículo 48, 86, 228 y 229 de la Constitución Política**

Con el propósito de salvaguardar el derecho a la seguridad social en pensiones, Artículo 48 de la C.P., la jurisprudencia ha dicho que es un derecho subjetivo. Así se expresó en la sentencia T-1752/2000. Es pues un derecho a algo reclamable ante los funcionarios administrativos; y también ante los funcionarios judiciales porque la justicia es una función pública y los ciudadanos tiene acceso a ella (artículos 228 y 229 C.P.).

En materia de seguridad social en pensiones, el derecho se adquiere no solo con base en la actual normatividad de ley 100 de 1993, sino también de acuerdo con los regímenes pensionales anteriores, siempre que se den algunas circunstancias que la ley exija, por permitirlo el inciso 2º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, en armonía con los decretos 691 de 1994 y 2527 de 2000, cuando se trata de empleados públicos.

El aspirante a pensionado tiene el derecho a que se le resuelva su situación dentro del marco correspondiente, preferenciándose el derecho sustancial. Y si ello no ocurre y se le afectan derechos fundamentales puede acudir a la tutela (artículo 86 C.P.).

## **VIOLACION DE LA LEY COMO CAUSAL DE NULIDAD**

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – mediante resolución No. 322930 de 2014, intermedio de la Gerente Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES, reliquida su pensión de vejez conforme a las leyes pero lo excluye del régimen favorable a los empleados oficiales, si se tiene en cuenta que ha prestado servicio a la misma como Auxiliar Administrativo, de tal forma se estima que por disposición de la Ley 33 de 1985, decreto 1158 de 1994 a la señora MICAELINA JARAMILLO



LOZANO tiene derecho a una prestación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiese devengado el último año de servicio, incluidos todos los factores salariales que son aplicables para el caso especial.

No se entiende los motivos por los cuales LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – establece en formas restrictivas limitantes adicionales indicando que no se tienen en cuenta factores salariales tales como: prima de servicio, prima de antigüedad, bonificación servicios, prima de vacaciones y prima de jubilación con los factores antes enunciados.

En la resolución No. GNR 322930 del 16 septiembre 2014, en la cual se reconoció la reliquidación de la pensión de vejez a la señora Micaelina Jaramillo Lozano al igual que en la resolución No. GNR 106533 del 14 abril 2015 donde le confirman en todas y cada una de sus partes la resolución GNR 322930 del 16 septiembre 2014, y para la cual se está solicitando la nulidad parcial, observamos que el valor que fue liquidado es muy inferior al que legalmente le corresponde.

Las normas que son violadas por LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – las indicamos a continuación:

### **Existencia de regímenes especiales.**

No solamente en Colombia sino en muchos estados existen regímenes especiales en España por ejemplo, existen numerosos regímenes especiales la ley de seguridad social y presenta una lista abierta que puede ser ampliada, están los regímenes especiales para los trabajadores agrícolas, los trabajadores del mar, los trabajadores autónomos, los funcionarios públicos civiles y militares los empleados de hogar, los estudiantes y se permite que el ministerio de trabajo determine otros regímenes especiales.

En cuanto a los regímenes especiales, nuestra jurisprudencia en la sentencia C-608/99 expreso:

*“Ha sostenido esta corte que el legislador mientras no desconozca postulados disposiciones constitucionales goza de atribuciones suficientes para estructurar regímenes generales y especiales en materia salarial y prestacional”.*



*“... El establecimiento de regímenes pensionales especiales como aquellos señalados en el artículo 279 de la ley 100 que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio favorece a los trabajadores a los que cubre”.*

Antes de la ley 100 de 1993 existieron varios regímenes especiales su característica es que no se rigieron por las normas prestacionales ordinarias la misma ley 33 de 1985 excluía de la regla general sobre requisitos para la pensión y monto de la mesada a “aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”.

### **Régimen especial vigente:**

El régimen especial vigente para los empleados oficiales es el establecido en la ley 33 de 1985. La mencionada ley contempla: Asignación básica, Prima de servicios, prima de riesgos, bonificación de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, Sub. Alimentación, auxilio de transporte, bonificación de recreación, para empleados oficiales

Es de agregar que existieron normas que mantuvieron la vigencia del régimen especial, antes de expedirse la ley 100 de 1993:

La ley 33 de 1985 regulo el tema de las pensiones de los empleados oficiales. Sin embargo el inciso 2º del artículo 1º estableció:

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

*“No quedan sujetos a esta regla general los empleados que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, **ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones**”. (Subrayado fuera de texto).*



**La ley 100 de 1993, al establecer el régimen de transición, mantuvo los regímenes especiales y, concretamente para el caso de estudio, el establecido en la ley 33 de 1985.**

Ya se ha indicado en el texto de este fallo que la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición y que el artículo 4º del decreto 691 de 1994 preciso que los servidores públicos que escojan para su pensión de vejez el régimen de prima media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y demás disposiciones que lo reglamentan.

Por lo tanto, está vigente el ley 33 de 1985 para los empleados oficiales que queden cobijados por el régimen de transición. Así lo han reconocido, entre otras, las sentencias 470/02 y 189/01.

Parágrafo. La liquidación de pensiones, reajustes y sustituciones se harán teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los funcionarios en la fecha en que se decrete la jubilación el reajuste o la sustitución respectiva.

**APORTES A PENSIÓN - El no descuento de algún factor de liquidación de la pensión no afecta el derecho a su inclusión. Cotización sobre factores que integran el monto pensional / DEBIDO PROCESO - Vulneración por desconocimiento de precedente judicial / PRECEDENTE JUDICIAL - Su desconocimiento vulnera el debido proceso / REGIMEN PENSIONAL ESPECIAL - Debe aplicarse en su totalidad. Inescindibilidad del régimen pensional**

Referente al segundo planteamiento del problema jurídico debe resaltar la Sala que en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado se ha señalado, que en los casos similares al del actor, el hecho de que no se haya cotizado sobre los factores que deben integrar el monto pensional, no son obstáculo para tenerlos en cuenta, dado que la Caja podrá descontar los aportes correspondientes a los factores reconocidos en la providencia judicial sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. Así que, aun siendo plausible la interpretación que realizó el Tribunal de la norma que aplica y que esta Sala destacó en el aparte de hechos de esta providencia, en el caso sub examine es claro que debía remitirse al monto pensional del régimen



anterior, tal como lo ha señalado el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. En efecto, desde el fallo de 28 de octubre de 1993, expediente 5244 proferido por la Sección Segunda de Esta Corporación, con ponencia de la Doctora Dolly Pedraza de Arenas se advierte que el hecho de que la administración no haya descontado los aportes correspondientes sobre algunos factores, no impide su reconocimiento para efectos pensionales, pues ellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional. (...) De lo expuesto, es dable concluir que la sentencia cuestionada se apartó del precedente del Consejo de Estado ya señalado. En el caso concreto, el problema jurídico no fue resuelto por el juez natural del proceso aplicando criterios interpretación normativa válidos razonables, pues no acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado, y no explica de forma consecuente por qué consideró necesario apartarse del precedente y fraccionar la norma que consideró aplicable. Corolario de lo anterior, la Sala considera que Tribunal accionado como juez de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tomó una decisión sin argumentar o motivar el por qué no acoge el precedente, negando la posibilidad de aplicar en su totalidad el régimen pensional especial.

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre los descuentos a los aportes pensionales, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de abril de 2006, Rad. 2849-04, MP. Jesús María Lemos Bustamante y sentencia de 22 de abril de 2010, Rad. 0858-09, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

Se predica lo anterior también para el caso de vía de hecho en actos administrativos. La Corte Constitucional en la T-827/99 señaló algunos eventos en los cuales ocurre vía de hecho en el trámite de las pensiones.

“Puede darse la **vía de hecho**, lo ha admitido esta Corte, si se forza arbitrariamente el ordenamiento jurídico, si se han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales (Sentencia T-765/98).

*Por otro aspecto, si se tiene en cuenta que hay derechos mínimos de los trabajadores, que no pueden disminuirse, ni son susceptibles de renuncia, ni es factible transigir sobre ellos y que los jueces y los funcionarios administrativos no pueden soslayarlos, entonces la violación de estos derechos y la no aplicación de la norma favorable en lo laboral es también vía de hecho.*





La interpretación que le está dando LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – cuando liquida la pensión de vejez al no tener en cuenta todos los factores salariales es errónea por cuanto la interpretación que hace es restrictiva en las normas citadas ya que tienen derecho a la liquidación teniendo en cuenta todos los emolumentos que percibía mi mandante MICAELINA JARAMILLO LOZANO en forma habitual tales como: asignación básica, Sub. Alimentación, Auxilio Transporte, Prima de Servicios, Prima de Vacaciones y Navidad, Bonificación Recreación, recargos Nocturnos y Dominicales y demás factores salariales.

### **FALSA MOTIVACION COMO CAUSAL DE NULIDAD**

**La base y el porcentaje son dos componentes inesperables que condicionan el importe de una pensión.**

El monto de la pensión se calcula sobre una base y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro.

Esa base, en la teoría de la seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario jubilatorio o haber jubilatorio.

La ley puede fijar el promedio para la base regulatoria de maneras diferentes. Lo fundamental es que cuando el promedio corresponda a un promedio se suele tomar lo ingresado, y si la base regulatoria es amplia, se actualiza según cómo evolucionen los precios a los salarios.

La ley 100 de 1993 estableció la base regulatoria para el régimen ordinario de las pensiones, bajo la denominación de ingreso Base de Liquidación. Señalo que se liquidara teniendo en cuenta *“el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante diez años anteriores al reconocimiento de la pensión”*. (Artículo 21).

Pero, tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes.

Es imposible desvertebrar el efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente acción ordinaria, que el porcentaje es el de el régimen especial ley 33 de 1985 y la base reguladora es la señalada en la ley 100/93 por lo tanto el ingreso base de liquidación (IBL)



fijado en el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100/93 solo tiene aplicación específicamente para lo allí indicado y en el evento de que en el régimen especial se hubiere omitió el señalamiento de la base reguladora.

Si un funcionario del ministerio público reúne los requisitos para gozar del régimen especial se aplicara en su integridad el artículo 1 de la ley 33 de 1985, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100/93, hacer lo contrario es afectar la inescendibilidad de la norma jurídica. Además el inciso segundo del artículo 36 de la ley 100, de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cubija “*el monto de la pensión de vejez*” y el monto significa una operación aritmética e un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en la ley 33 de 1985.

Por otro aspecto, es importante aclarar dos aspectos:

- a) La parte final del inciso 2º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, reza; “*Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas parece acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley*”. Este párrafo es esgrimido por la Caja Nacional de Previsión Social, para justificar la afectación al derecho de quien instauro la acción. No es jurídicamente aceptable esta argumentación. En primer lugar, la frase se refiere a las “demás condiciones y requisitos” luego no puede incluir al monto de la pensión que ya fue fijado por la ley 33 de 1985, en segundo lugar, el pardo hace referencia a “acceder a la pensión” es decir a condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión no para el monto de la mesada; y en tercer lugar, el decreto 2527 de 2000 expresamente suprimió tal párrafo, en efecto el artículo 4º de dicho decreto que reglamenta el régimen de transición, dice: “*conservación de beneficios del régimen de transición. De conformidad con el inciso 2 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones tenían las edades o el tiempo de servicio o de cotización previsto en dicha disposición, serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Para efectos de determinar el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio, en los regímenes de transición previstos en el 2 inciso del artículo 36 de la ley 100 d 1993, solo se sumaran los tiempos de servicios o el número de semanas cotizadas en distintas*



*entidades cuando así lo haya previsto el régimen de transición que se aplique".*  
Como se aprecia, no se excluyó en la nueva norma la parte que invoca la Caja Nacional de Previsión Social.

- b) Ya se indicó que la ley 100 de 1993, dice que en el régimen ordinario el promedio para la mesada se calcula sobre lo recibido en los últimos diez años. Pero puede haber dos circunstancias excepcionales: i) cuando un régimen especial, dentro del régimen de transición, específicamente fija la base reguladora y el promedio; que es el caso de los empleados públicos y por consiguiente, se aplica lo que indica la norma del régimen especial: Y ii) cuando un régimen especial, (que no es la situación para los empleados públicos **no fija la base reguladora ni el promedio**, evento en el cual se tiene en cuenta el inciso 3º del artículo 36 de dicha ley: *"El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez años para liquidar el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificado que expida el DANE"*

Para clarificar aún más lo expuesto anteriormente se tendrá en cuenta lo que se señala a continuación.

## POSICIÓN JURISPRUDENCIAL

**La base reguladora esta en relación directa con el salario que se devengue en el periodo determinado por el régimen especial.**

Es de la esencia de las pensiones, su íntima relación con el salario devengado por el aspirante a pensionado. En la legislación anterior a la ley 100 de 1993, no existía la menor duda sobre la relación directa entre salario y pensión. La ley 1ª de 1932 estableció una escala móvil según el suelo. La ley 6ª de 1945 estableció las dos terceras partes *"del promedio de sueldos o jornales devengados"*. El código sustantivo del trabajo en su artículo 260, establecía como monto de la mesada el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicios". Para los funcionarios del estado, el artículo 27 del decreto 3135 de 1968 señalo medida idéntica. El decreto 1848 de 1969 clarificara que el porcentaje es sobre salarios y primas de toda especie. La ley



33 de 1985 mediante el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

La ley 100 de 1993, artículo 18 expresamente indica que la base de cotización será el salario mensual. En la misma ley se establecieron dos regímenes, uno de ellos, el de régimen de ahorro individual con solidaridad tiene relación con el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, mientras que en el régimen solidario de prima media con prestación definida, se tiene en cuenta el “ingreso base de liquidación”.

*“Así las cosas y teniendo en cuenta que los falladores de instancia fundamentaron sus decisiones negativas en la pensionada resolución, la corte habrá de analizar si en su expedición hubo quebranto del debido proceso y consecuentemente del derecho a la seguridad social cuya protección impetra el actor, como quiera que el juez constitucional en un Estado Social de Derecho fundado en el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran (C. P. art 1), le corresponde velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas, en el evento de que puedan resultar vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos señalados en la ley”.*

*M.P. Alfredo Beltrán Sierra.*

En la T-470/02 se agregó lo siguiente:

Ese ingreso, en el régimen de prima media con prestación definida, es el salario realmente devengado (T-865/99, SU-430/98, T-971/01, C-179/97).

La sentencia T-1016/2000 señaló:

*“La jurisprudencia ha sido enfática en tener en consideración el salario del trabajador o del ex trabajador como elemento informante de la cuantificación de la mesada. “Conocido es el aforismo de que lo accesorio sigue a lo principal. El salario es factor esencial para el reconocimiento de la pensión, luego su tasación es imprescriptible como lo es el derecho mismo a la pensión, y por lo tanto cualquier factor salarial que se hubiere omitido al determinar el sueldo básico para la liquidación de la prestación puede reclamarse en cualquier tiempo” (sentencia del 23 de marzo de 1979 del Consejo de Estado, M.P. Ignacio Reyes Posada. En el mismo sentido otra sentencia del 2 d marzo de 1979”).*



## **Señalamiento del porcentaje de la pensión**

### **REGIMEN DE TRANSICION PENSIONAL - Factores base de liquidación. Liquidación de la pensión, Monto de la pensión. Factores de cotización / EMPLEADOS PÚBLICOS - Factores de liquidación pensional / PENSION DE EMPLEADOS PÚBLICOS - Regulación legal**

Se debe destacar por la Sala que en lo relacionado con el monto pensional, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sección, en la cual se señala que el régimen de transición hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión y de la forma de liquidar la misma, toda vez que como lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el monto de la pensión para sus beneficiarios es el establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, entendiendo por monto no sólo el porcentaje de la pensión, sino la base de dicho porcentaje. De igual forma, debe resaltarse que el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6 del Decreto 691 del mismo año, enuncia los factores que se consideran salario para los fines de la cotización, es decir, el salario base para calcular las cotizaciones que mensualmente deben efectuar los servidores públicos al sistema de seguridad social en pensiones, o sea, el ingreso base de cotización (IBC). A diferencia del ingreso base de liquidación (IBL), que se conforma con el promedio de lo devengado en la forma prevista en las normas anteriores al primero de abril de 1994 que resulten aplicables al beneficiario del régimen de transición. En este orden el derecho pensional del actor queda regulado por lo previsto en la Ley 33 de 1985, por tal razón esta es la normatividad que debió aplicar el juez de segunda instancia que profirió el fallo acusado y para el caso sería el , régimen pensional anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en su totalidad, es decir en cuanto a los requisitos exigidos para obtener el status pensional, edad y tiempo de servicios, y los factores que integran el ingreso base de liquidación. Sobre la liquidación del derecho pensional debe precisar la Sala que acorde con el anterior planteamiento y atendiendo a que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 no contempló los factores a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación es procedente, remitirse a las normas concordantes que señalaron la aplicación del régimen vigente para los empleados públicos del orden nacional.



**FUENTE FORMAL:** LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 36 / DECRETO 1158 DE 1994 - ARTICULO 1 / LEY 4 DE 1992 / DECRETO 691 DE 1994 - ARTICULO 6 / LEY 33 DE 1985 - / LEY 62 DE 1985 / DECRETO 407 DE 1994 - ARTICULO 184 / DECRETO 1045 DE 2010 - ARTICULO 45.

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre el monto pensional, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio de 2007, Rad. 0950-06, MP. Ana Margarita Olaya Forero; sentencia de 21 de Septiembre de 2000, Rad. 470-99, MP. Nicolás Pájaro Peñaranda y sentencia de 5 de noviembre de 2009, Rad. 0534-08, MP. Gerardo Arenas Monsalve.

No sabrá repetir que es la norma la que fija la cuantía de una mesada y por supuesto la forma de liquidarla. Para esto se tiene en cuenta el salario, el periodo, el porcentaje e inclusive topes máximos y mininos. Puede establecerse normativamente un tratamiento diferenciado en materia de monto para la pensión. La sentencia C-155/97 estableció que ese procedimiento es constitucional.

Actualmente, el régimen de prima media con prestación definida, permite a los afiliados o sus beneficiarios, obtener pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la ley. En este régimen, los artículos 34 y 35 de la ley 100 de 1993, establecen los valores máximos y mininos para efectos del reconocimiento de a pensión de vejez así:

Artículo 34, inciso final:

*“el valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el articulo siguiente.”*

En el parágrafo 3º del artículo 18 de la ley100/93, se autorizó al gobierno nacional para limitar el monto de la pensión, en el régimen solidario de prima media con prestación definida, **a veinte (20) salarios mínimos**.

La C-089/97 dijo al respecto:

*“de esta manera, tenemos que los límites máximos de las pensiones de vejez y jubilación, son los siguientes:*

1. *Las pensiones causadas y reconocidas antes de la vigencia de la ley 100 de1993, tenían como límite el 75% de la base de liquidación, sin que la pensión mensual*





*sobrepasara los quince (15) salarios mínimos, salvo lo estipulado en laudos arbitrales, pactos colectivos y convenciones colectivas, casos en los que estos montos podrían ser distintos.*

- 2. Las pensiones causadas y reconocidas en vigencia de la ley 100 tienen como límite superior el 85% del ingreso base de liquidación, sin que el monto de la pensión mensual exceda de veinte (20) salarios mínimos legales.*
- 3. Por su parte, la ley 4ª de 1992, ley marco que fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso y de la fuerza pública, establece, en relación con los congresistas, que el monto de la pensión no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen. Esta ley no fijo un máximo para las pensiones de los congresistas.*
- 4. Por su parte, la ley 4ª de 1992, ley marco que fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso y de la fuerza pública, establece, en relación con los congresistas, que el monto de la pensión no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen. Esta ley no fijo un máximo para las pensiones de los congresistas.*
- 5. Por su parte, la ley 4ª de 1992, ley marco que fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso y de la fuerza pública, establece, en relación con los congresistas, que el monto de la pensión no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen. Esta ley no fijo un máximo para las pensiones de los congresistas.*
- 6. Por su parte, la ley 4ª de 1992, ley marco que fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso y de la fuerza pública, establece, en relación con los congresistas, que el monto de la pensión no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen. Esta ley no fijo un máximo para las pensiones de los congresistas.*
- 7. Las pensiones causadas y reconocidas antes de la vigencia de la ley 100 de 1993, tenían como límite el 75% de la base de liquidación, sin que la pensión mensual*



*sobrepasara los quince (15) salarios mínimos, salvo lo estipulado en laudos arbitrales, pactos colectivos y convenciones colectivas, casos en los que estos montos podrían ser distintos.*

8. *Las pensiones causadas y reconocidas en vigencia de la ley 100 tienen como límite superior el 85% del ingreso base de liquidación, sin que el monto de la pensión mensual exceda de veinte (20) salarios mínimos legales.*
9. *Las pensiones causadas y reconocidas antes de la vigencia de la ley 100 de 1993, tenían como límite el 75% de la base de liquidación, sin que la pensión mensual sobrepasara los quince (15) salarios mínimos, salvo lo estipulado en laudos arbitrales, pactos colectivos y convenciones colectivas, casos en los que estos montos podrían ser distintos.*
10. *Las pensiones causadas y reconocidas en vigencia de la ley 100 tienen como límite superior el 85% del ingreso base de liquidación, sin que el monto de la pensión mensual exceda de veinte (20) salarios mínimos legales.*
11. *Por su parte, la ley 4ª de 1992, ley marco que fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso y de la fuerza pública, establece, en relación con los congresistas, que el monto de la pensión no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen. Esta ley no fijo un máximo para las pensiones de los congresistas.*

M.P. Alejandro Martínez Caballero

*17. La ley 1ª de 1932 fijo como tope máximo \$100.00 la ley 6ª de 1945 dijo que no podría exceder de \$200.00 al mes. El decreto 31354 d 1968 hablo de \$10.000.00 la ley 4ª de 1976 señalo como tope máximo 22 veces el salario mínimo mensual más alto. Posteriormente se expidió la ley 71 de 1988 que hablo de quince salarios minios. Sobre la vigencia de estas normas de la ley 4ª y la ley 71 dijo la Corte Constitucional que no está vigente: "A esta conclusión se llega si se tiene en cuenta que el artículo 2º de la ley 4ª de 1976 en virtud del cual se dispuso que las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo legal más alto ni superior a 22 veces este mismo salario, fue derogado por el artículo 2º de la ley 71 de 1988; ello en razón que no obstante haber conservado el límite mínimo pensional establecido en dicha norma, determino que a partir de su vigencia las pensiones tendrían como mínimo un equivalente a quince (15) salarios minios legales, salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales, pero de otra parte, estima la Corte, que el artículo 2º de la ley 71 de 1988 fue derogado por el artículo 18 d la ley 100 de 1993, en cuanto al monto máximo de las pensiones para el caso de los trabajadores que se acojan o se mantengan en el régimen solidario de prima media con prestación definida".*

Por otro aspecto, el artículo 35 de la ley 100/93 en su primer inciso estableció:

*"el monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario minio legal mensual vigente".*



No obstante que la norma se refiere a la pensión minina el párrafo del artículo 35 de la ley 100 de 1993, establecía:

*“Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la ley 4ª de 1992, no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2º de la ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones excepcionales (sic) en el artículo 279 de esta ley”. (La parte subrayada fue acusada).*

15. Según el decreto 1158/94 el salario mensual, base de cotización, está integrado por las siguientes factores: la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica cuando sea factor salario, las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sea factor salario, la remuneración por **trabajo dominical y festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, la bonificación por servicios prestados.**

La C-089/97 decidió:

*“primero. Declárese **INEXEQUIBLE** la expresión “salvo en los regímenes e instituciones excepcionales (sic) en el artículo 279 de esta ley”. Contendida en el párrafo del artículo 35 de la ley 100 de 1993.*

*Segundo. Esta sentencia tendrá efectos hacia el futuro. Es decir, aquellos pensionados que resulten beneficiados, en abstracto, con la declaración de inexequibilidad podrán solicitar que se les aplique el beneficio que establece el párrafo del artículo 35 de la ley 100 de 1993, a partir de la notificación de esta sentencia y el derecho al reajuste solo se causara desde el día en que se presente la solicitud correspondiente.*

La mencionada sentencia dijo en uno de sus considerandos:

*“5º El legislador podía establecer válidamente que los pensionados a quienes se les reconociera la pensión en determinada época, no quedarían sujetos a lo límite de los quince (15) salarios mínimos que establecía el artículo 2º de la ley 71 de 1988, variando en su favor una situación ya consolidada. No obstante ninguna razón de orden constitucional que le impida al legislador variar la situación jurídica de los destinatarios de una norma, siempre que esa decisión no implique el desconocimiento de derechos adquiridos (artículo 587 de la Constitución nacional).*

Por consiguiente, sobre el tope de la mesada la misma sentencia C-089/97 dice:

*“sin embargo ha de entenderse que el límite que establece la ley 100 de 1993, será el límite máximo al que podrán aspirar los pensionados que se benefician*



*con la prerrogativa que señala el parágrafo del artículo 35 es decir los veinte (20) salarios mínimos, salvo si el régimen pensional al que están sometidos establece un límite mayor a este”.*

*Una interpretación diferente, conduciría a la existencia de un grupo de pensionados privilegiados, **excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones.***

*En síntesis, los pensionados de los regímenes especiales cuyo sistema pensional fije un límite máximo, superior al que consagra la ley 100/93 no estarán sujetos a este, pues la ley 100 no se les puede aplicar. Por el contrario si esos límites son inferiores tiene derecho a solicitar la aplicación de la ley de seguridad social, por ser más favorable a sus intereses.*

*Así las cosas para evitar interpretaciones que desconozcan los derechos de los pensionados de los regímenes especiales a los que se refiere el aparte acusado, la Corte declarará su inexequibilidad.*

*De todo lo anterior se colige que para la liquidación de la mesada después de la ley 100/93 se tendrá en cuenta el régimen especial y el principio de favorabilidad en todos sus aspectos.*

## **5. PRUEBAS.**

Con el fin de probar los hechos descritos en el respectivo acápite de la presente demanda respetuosamente me permito solicitar a su Señoría decrete y valore como elementos del acervo probatorio los siguientes documentos que anexo:

- 5.1 Copia de la resolución No. 16272 de 2008 por medio de la cual el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) en liquidación le reconoce la pensión de vejez a la señora Micaelina Jaramillo Lozano, pero dejando en suspenso el pago de la mesada pensional hasta tanto se acredite el retiro definitivo del servicio público.
- 5.2 Copia de la resolución No. GNR 322930 de 2014 por medio de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – reliquida la pensión de vejez a la señora Micaelina Jaramillo Lozano.



- 5.3 Copia de la resolución No. GNR 106533 de 2015 por medio de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – confirma en todas y cada una de sus partes la resolución la resolución No. GNR 106533 de 2015.
- 5.4 Copia mediante decreto No. 280-018.0831 del 13 de noviembre de 2013, el señor alcalde municipal de Tuluá, el secretario de Desarrollo Institucional y el Jefe Oficina Asesora Jurídica, aceptan la renuncia irrevocable al cargo de auxiliar Administrativo Código 407 grado 01, en la secretaria de Hacienda.
- 5.5 Copia del recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución No. GNR 322930 del 16 septiembre 2014.
- 5.6 Copia de los certificados de los formatos 1, 2 y 3 laborales el cual se determina la información laboral certificados por la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), firmado por la señora profesional Universitario señora Nidia Mondragón Garzón.
- 5.7 Copia del resumen de los pagos devengados de los siguientes desde el mes de enero del año 2004 hasta el 30 de noviembre de 2013 fecha en la cual se desvinculo de la entidad la señora Micaelina Jaramillo Lozano.
- 5.8 Copia de la cedula de ciudadanía de la señora Micaelina Jaramillo Lozano.

## DISCRIMINACION DE LA CUANTIA

La cuantía del presente proceso está regulada por lo ordenado en el artículo 155 del C.P.A.C.A.

Valor de la pensión solicitada y legal en cuantía de año 2013	<b>\$ 1.238.898.00</b>
Nos arroja a diferencia de	<b>\$ 201.134.00</b>
Valor de la pensión en el año 2013	<b>\$ 991.953.00</b>

## PARA EL AÑO 2013

Desde el 1º de noviembre al 30 de diciembre con un incremento la diferencia corresponde a la suma de \$ 201.134.00\*3 mesada para un total de..... **\$ 603.402.00**



## **PARA EL AÑO 2014**

Desde el 1º de enero hasta el 30 de diciembre con el incremento del IPC del 3.66% la diferencia corresponde a la suma de \$ 205.036.00\*14 mesadas para un total de..... \$ **2.870.504.00**

## **PARA EL AÑO 2015**

Desde el 1º de enero hasta el 30 de octubre la diferencia corresponde a la suma de \$ 212.541.00\*14 mesadas para un total de..... \$ **2.975.574.00**

## **PARA EL AÑO 2016**

Desde el 1º de enero hasta el 30 de abril la diferencia corresponde a la suma de \$ 226.930.00\*4 mesadas para un total de..... \$ **907.720.00**

**La cuantía la estimo en la suma de..... \$ 7.357.200.00**

## **6. COMPETENCIA.**

### **6.1 Competencia por razón de la cuantía.**

De conformidad con el artículo 155 numeral 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer del proceso es del Señor Juez Administrativo, en primera instancia, toda vez que la cuantía de las pretensiones al momento de la presentación de la demanda excede de veinte (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

### **6.2 Competencia por razón del factor territorial.**

En razón a que el último lugar donde la demandante prestó sus servicios personales en calidad de Auxiliar Administrativo fue en la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), la competencia para conocer del proceso es del Señor Juez Administrativo del Circuito de Buga Valle de conformidad con el artículo 156 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## **7. ANEXOS.**

7.1 El poder especial que me fue conferido por la señora Micaelina Jaramillo Lozano para presentar la demanda.





- 7.2 Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la Alcaldía Municipal de Tuluá (V).
- 7.3 Copia de la demanda y sus anexos para la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones –
- 7.4 Copia de la demanda y sus anexos para el traslado al Ministerio Público.
- 7.5 Copia de la demanda y los anexos en medio magnéticos para el traslado Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- 7.6 Copia de la demanda para el archivo del Despacho.
- 7.7 Los documentos aducidos como prueba en el respectivo acápite de la demanda.

## **8. NOTIFICACIONES.**

- 8.1 Al suscrito apoderado se la puede notificar en la calle 25 No. 23 – 30, oficina 113 Centro Comercial los Cristales de la ciudad de Tuluá (V) celular 318 771 88 97; e-mail: [gamorenoaristi@gmail.com](mailto:gamorenoaristi@gmail.com).
- 8.2 A mi poderdante señora Micaelina Jaramillo Lozano las recibirá en la calle 22 No. 26 – 58 Barrio Tomas Uribe de la ciudad de Tuluá (V) teléfono 2322847 celular 3154840151.
- 8.3 Al representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – se lo puede notificar en la sede de la entidad ubicada en la en la carrera 10 # 27-91, Bogotá, D.C. Teléfono (1) 4890909.

Atentamente.

---

**GUSTAVO ADOLFO MORENO ARISTIZÁBAL**

C. C. No. 6.498.897 de Tuluá (V)

T. P. No. 191.327 del C. S. de la J.